Sección de Notas

HISPANOAMERICA, MARZO-ABRIL DE 1962

La crisis histórica que Hispanoamérica está atravesando desde hace, aproximadamente, un decenio se agravó considerablemente en el segundo semestre de 1961, y de un modo especial y más agudo, si cabe, durante los cuatro primeros meses de 1962. En agosto de aquel año, el monroísmo estadounidense arbitró la fórmula de la Alianza para el Progreso, que pretendía —y pretende— uniformar políticamente a toda América según el sistema de la liberal-democracia yanqui, a través de una prometida ayuda económica de dos mil millones de dólares anuales, que se repartirán entre los países hispanoamericanos en la medida en que éstos establezcan y defiendan los principios democráticos *made in USA*.

Que ésta no era la vía acertada para salvar a los países hispánicos de América se vió en seguida cuando la crisis brasileña reiteró con otra música, pero casi con la misma letra, la problemática socioeconómica y política que ya había evidenciado la crisis dominicana y que desde hacía tiempo venían manifestando las situaciones internas de Cuba, Guatemala, Venezuela, Colombia, Bolivia y Argentina, por lo menos. Pocos meses después, en noviembre de 1961, las alteraciones ecuatorianas que acabaron con la deposición de Velasco Ibarra constituyeron otro aviso de clarín, cuyas notas se hicieron aún más estridentes después de la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de América, celebrada en Punta del Este, como es sabido, a fines de enero de 1962.

Desde entonces acá, la ineficacia e impotencia de la llamada Alianza para el Progreso han quedado plenamente demostradas, y el nuevo mundo ha empezado a debatirse de nuevo en ese terrible movimiento pendular que caracterizó la vida hispanoamericana en el siglo XIX: de la anarquía a la dictadura y de ésta otra vez al caos. Los más perspicaces observadores políticos hispanoamericanos atribuyen esta situación a la impermeabilidad y la inflexibilidad de las oligarquías gobernantes, que vienen negándose empecinadamente no sólo a realizar la cada vez más urgente transformación política, social y económica que requieren los países hispanoamericanos, sino a reconocer la necesidad de tal cambio. De ello constituye paradigma la

última crisis argentina, que no es, sin embargo, más que la manifestación descarada y violenta de esa resistencia antinacional de las castas dominantes, común a muchas repúblicas de Hispanoamérica: Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú, etc.

Frente a esos elementos de poder, las nuevas generaciones manifiestan su indignado cansancio, su irritación o su consciente voluntad revolucionaria. A la vez, muy diversos representantes de la sociedad —intelectuales, militares, productores, profesionales, pequeños comerciantes e industriales— muestran también su inquietud y tratan de prepararse para el día —bastante lejano todavía, por desgracia— en que esa radical mudanza se verifique. Por ahora, empero, se trata solamente de prepararla, de hacerla factible. A toda Hispanoamérica le son aplicables las palabras que dirige a Colombia un editorialista de *La Nueva Prensa:* «La revolución nacional es hoy un mito. Pero sólo los mitos mueven a los pueblos. Por todo el territorio de la República se reproducen los grupos nacionalistas. Los grupos que desean integrar a la mayoría de los colombianos. Los que creen en la posibilidad de una revolución que no sea necesariamente clasista. De una revolución que ponga en cuarentena la falsa dicotomía izquierda-derecha de que vive y se nutre la clase dirigente.»

La crisis argentina

El 18 de marzo de 1962 se celebraron elecciones en la República Argentina, en la capital federal y en quince provincias, para elegir catorce gobernadores, renovar las Cámaras de Diputados y las autoridades municipales de dichas provincias y cambiar parcialmente los miembros del Congreso Nacional, del que iban a elegirse 82 diputados. El resultado de los comicios, sorprendente para la propia oposición y, naturalmente, para el Gobierno, arrojó un éxito aplastante del peronismo, que obtuvo el 33 por 100 de los votos y cuyos candidatos ganaron en once provincias. A su vez, la Unión Cívica Radical Intransigente, partido del Gobierno, obtuvo el 23 por 100 de los votos y ganó la mayoría en Buenos Aires y en tres provincias. La Unión Cívica Radical del Pueblo logró solamente el 16 por 100 de los votos y ganó la mayoría en una provincia. Por último, los conservadores obtuvieron el 5,1 por 100 de los votos y lograron la victoria en otra provincia.

Este resultado implicaba un cambio profundo en la Cámara de Diputados de la Nación, en la que el Gobierno perdía 27 escaños y quedaba con 75; la Unión Cívica Radical del Pueblo perdía 17 y

quedaba con 57, los conservadores iban a contar con 8, los demócrata-cristianos, con 2, y los diversos grupos —Unión Popular, Bandera Blanca, Tres Banderas, Laborismo, Movimiento Nacional Popular— que se reúnen bajo la denominación de peronismo entraban en el Congreso, después de siete años de ostracismo, con 50 diputados.

Si se tiene en cuenta que el peronismo llevaba siete años de persecución y no disponía, por tanto, de prensa, radio, televisión ni ningún órgano de propaganda, es preciso reconocer que su victoria ha sido prácticamente absoluta y constituye una durísima lección para quienes ejercen el mando desde 1955, pretendiendo desconocer, con empeño digno de mejor causa, la realidad política y social de la República Argentina. Pero lejos de aprender en esta cruda experiencia, los factores de poder —Ejército, Iglesia, las fuerzas económicas y determinadas embajadas— han ido nuevamente contra la realidad, y su reacción ha producido tan honda crisis en la nación, que ha derribado y destruído el edificio político que con pretensiones de democrático habían levantado esos mismos poderes.

Pero para comprender el sentido del actual momento político argentino es necesario realizar una breve excursión por el pasado inmediato de la gran república platense. Se debe recordar, en efecto, que Frondizi, nacido políticamente el 6 de septiembre de 1930, cuando fué detenido en la calle Florida por participar en una manifestación de protesta contra el golpe militar que llevó al poder al general Uriburu, instrumento de los conservadores, se propuso ser el representante del radicalismo moderado, que intentaba conciliar sus tendencias electoralistas con sus servicios a la oligarquía y al imperialismo, aunque tratando de parecer izquierdista, para lo cual realizó algunos servicios en el Socorro Rojo Internacional. Durante el gobierno de Perón, los radicales se integraron en la Unión Democrática, que formaron todos los grupos políticos tradicionales. Debido a ello, el pueblo identificó al radicalismo con las fuerzas oligárquicas. Los radicales formaban el centro de la citada coalición, cuya ala derecha estaba integrada por los conservadores y los liberales, y cuya ala izquierda tenía a los socialistas —pro yanquis— y a los comunistas —favorables a Inglaterra.

Para aclarar la confusión que le identifica con la oligarquía, Frondizi echó mano del vocablo yrigoyenista «intransigencia», que significaba oposición severa y obstinada a la oligarquía y el imperialismo, y no se mostró intransigente, en cambio, con la fuerza popular de Perón, a quien hizo una crítica de tipo nacionalista en el aspecto económico, sobre todo. El propio Frondizi, en un discurso radiado y televisado en vísperas de las elecciones que han producido su caída,

analizó con bastante objetividad las razones del peronismo. «De la revolución del 43—dijo Frondizi—surgió un movimiento de raigambre popular que, por obra de su jefe, quiso lograr, sin conseguirlo, la alianza con el radicalismo para ejecutar una política de justicia social. El pueblo, que había perdido la confianza en los partidos políticos y en la democracia, como consecuencia de trece años de burla sistemática a la voluntad popular, apoyó al peronismo en las elecciones de 1946.» Y añadió:

«Desde entonces, la política argentina se congeló en los términos antagónicos de peronismo y antiperonismo. Y de allí nació la oposición tenaz y sin cuartel al peronismo. Esta actitud, negativa en la práctica, facilitó la permanencia de su jefe como único caudillo de masas y anquilosó la acción política y dinámica de la oposición. En lo económico, el error fundamental del peronismo consistió, a mi juicio, en no entender que así como no puede haber una política económica que se desentienda de la justicia social, tampoco puede mantenerse una política de justicia social sin base económica. No se puede partir la riqueza que no existe. Si el peronismo hubiera invertido las reservas acumuladas por el país durante la guerra en explotar el petróleo, el hierro y el carbón, en construir usinas hidroeléctricas y caminos, en modernizar el transporte y en mecanizar el agro, su política social hubiera tenido bases económicas permanentes.

Sin esas bases, su final era previsible. Ante el fracaso de dicha política se alentó el enfrentamiento de los sectores sociales. Y necesariamente, en esas condiciones, la situación creada no podía terminar sino por una revolución, es decir, violentamente. De movimiento nacional que realmente era, aun con todos sus errores políticos, económicos y sociales, pasó a ser facción. Paradójicamente, el peronismo se convirtió desde el Poder en una fuerza extremista. El régimen se aisló del pueblo en general y con él aisló a la clase obrera de los otros sectores, al querer convertirla en su único sostén político. Su crisis moral se expresó en el enfrentamiento con la Iglesia.»

La exactitud de este diagnóstico sobre el régimen de Juan Perón se completa con una precisión semejante al juzgar el movimiento que derrocó al célebre caudillo. «La revolución del 55—afirmó Frondizi—tuvo como propósito declarado restablecer un régimen de libertad y evitar el enfrentamiento entre los argentinos.» Por eso, el jefe de la revolución, general Leonardi, interpretó el sentimiento general del pueblo en la frase «Ni vencedores ni vencidos», pero se impusieron dos posiciones extremistas: la antiperonista, que se llamó «gorila», y la peronista, que se autodefinió de «dura». Ambas posiciones son, a

juicio de Frondizi, «retornistas», pues se nutren del pasado y quieren volver al pasado.

Frondizi, naturalmente, quiso sustraerse por igual a la caída en cualquiera de esos dos extremismos, y ello le valió, por de pronto, los cuatro millones de votos peronistas que le elevaron a la presidencia de la república en febrero de 1958. Pero Frondizi no supo atraerse de verdad al peronismo; en vez de hacerlo se limitó a negociar con Perón, como le aconsejó Rogelio Frigerio. Ello le permitió, sin duda, ganar las elecciones; pero como las ganó con los votos de los «espurios», el «gorilismo» militar no le hubiera permitido tomar el mando si no hubiera pactado con este extremismo. Así, Frondizi tuvo que someterse a los militares, quienes dirigieron en realidad la política argentina, especialmente en asuntos exteriores y en asuntos económicos.

En esta situación, Frondizi no dejó de moverse con astucia y habilidad, pues haciendo de la necesidad virtud, intentó presentarse ante el pueblo —y lo consiguió en parte, como demuestran sus triunfos en las elecciones parciales de 1960 y de 1961— como el campeón del equilibrio o el representante del mal menor. De este modo, con una política de suavidad para el peronismo, Frondizi consiguió muchos votos peronistas y muchos antiperonistas, que se los entregaban al Gobierno para evitar el posible y siempre temido triunfo del peronismo. Estas victorias parciales alentaron al presidente, quien consideró suficientemente madura y fuerte su posición para dar la batalla definitiva al «gorilismo» de Aramburu y a Perón. Las elecciones del 18 de marzo de 1962 han constituído esa batalla. Su resultado demuestra de un modo absolutamente indudable el profundo error de Frondizi al no haberse dado cuenta de la realidad social de su país, pues ésta ha demostrado seguir siendo peronista, aunque sin la presencia física de Perón.

Por último, la reacción del «gorilismo» militar ha sido también clara. El grupo de militares que usurpa la representación de las fuerzas armadas argentinas ha demostrado defender ante todo sus posiciones, pues para mantenerlas, esos extremistas no han dudado en asesinar el régimen democrático, pese a sus reiteradas confesiones de democratismo. Con ello han abierto en el cuerpo institucional una herida ya infectada y que es posible que sólo se cierre mediante una revolución que establezca en la Argentina el gobierno nacional popular que está necesitando. Pero, por de pronto, la camarilla militar ha ganado la partida. Veamos cómo.

Fracasado el plan frondizista de anular a la vez al aramburismo y al peronismo, el régimen representado por el presidente no peligraba, pues el triunfo electoral peronista no significaba más que la ocu-

pación de cincuenta escaños en un total de 172. Ahora bien: después de la Conferencia de Punta del Este, cuando la camarilla «gorila» impuso a Frondizi el rompimiento con Cuba, el presidente se comprometió también a impedir la resurrección peronista. Frondizi —como ya se ha dicho— creía vencer a éste y al otro extremismo, y cuando los militares se opusieron a la medida de levantar el entredicho al peronismo, el presidente alegó que podría, supuesto un triunfo justicialista, llevar a cabo una intervención federal en aquellas provincias donde triunfase.

Así, conocido el resultado de las elecciones del 18 de marzo, Frondizi decretó la intervención en las provincias peronistas, pese a la oposición de los partidos menores contra esta medida, y con la alegría de Aramburu, quien se apresuró a denunciar al presidente por una resolución que él mismo había inspirado e impuesto. Así lo expresa el propio Frondizi en carta escrita desde la isla de Martín García: «Paradójicamente, quienes me instaban a intervenir todas las provincias en que triunfó el peronismo y quienes lanzan proclamas incendiarias advirtiendo a los peronistas qué género de represión intentarán contra ellos, aducen que la legalidad fué quebrantada por el presidente de la nación al decretar esas intervenciones».» (En *La Nueva Prensa,* Bogotá, 4-10 de abril de 1962, pág. 53.)

Aramburu, en definitiva, intentó despejarse el camino para obtener la presidencia en 1964. Para ello necesitaba que Frondizi se mantuviera en el Poder con objeto de no tener que afrontar el problema del reconocimiento por Estados Unidos de un gobierno no elegido democráticamente. Así, pues, el jefe del «gorilismo» se prestó a mediar ante la Marina, que pretendía deshacerse de Frondizi. Este se dispuso a facilitar tal gestión mediante el nombramiento de un gobierno de coalición, en el cual, sin embargo, tuvo que dar preferencia a los aramburistas. Pero la maniobra falló totalmente: ni la Marina ni el jefe del radicalismo popular —que vió el momento de vengarse de su enemigo máximo— se prestaron al juego de Aramburu, y la pretendida coalición gubernamental fracasó al no aceptar formarla ni los «gorilas» ni los radicales de Balbín. Imposible así la unión con éstos, Frondizi quedó aislado. El poder efectivo permaneció en manos de las fuerzas armadas, cuyos jefes supremos —Poggi, Alsina y Penas— formaron una Junta y decidieron la deposición de Frondizi, quien poco después fué confinado en la isla de Martín García.

Mientras estos acontecimientos se sucedían, el pueblo se mantuvo al margen, y el peronismo, al que ese pueblo había dado la victoria, demostró una serenidad y una prudencia hijas de la madurez política. Framini supo evitar, en efecto, cualquier reacción violenta de sus

hombres. No es extraño —se dirá—, pues la masa carece de fuerza y organización para provocar una rebelión popular. Así es, sin duda. Pero lo importante y ejemplar es que los mandos justicialistas hayan sabido sustraerse, incluso en contra de las sugestiones de Perón, a una acción que les hubiera confundido con los comunistas, y hayan demostrado de ese modo que son anticomunistas; más aún: cristianos, nacionalistas y socialistas.

En conclusión: la crisis argentina —aún no resuelta— ha dado el triunfo en esta primera etapa al extremismo militar. Victoria, sin embargo, pírrica. José María Guido, el nuevo presidente, aceptado por el Congreso sólo a título provisional, está absolutamente sometido a la facción «gorila» y ha empezado a gobernar gracias a haberse plegado a las exigencias de ese extremismo, a saber: intervención en las provincias, proscripción del peronismo y desintegración del movimiento gremial. Las graves dificultades que ha encontrado para formar gobierno demuestran, sin embargo, cuál es la actitud de la mayoría. ¿A qué expedientes habrá que recurrir para dominarla en las próximas y no muy lejanas elecciones?

Elecciones y violencia en Colombia

El 18 de mazo, coincidiendo con las elecciones argentinas, Colombia celebró también comicios para renovar las Cámaras. El resultado arrojó una considerable ventaja de la llamada Gran Coalición, es decir, la unión del liberalismo de Carlos Lleras Restrepo con la fracción conservadora de Ospina Pérez —unión que mantiene hoy la política del Frente Nacional, acordada en Sitges en 1957 por Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, actual presidente de la República— sobre los partidos no oficialistas que presentaron candidatos, o sea el ala izquierda del partido liberal o Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), que dirige Alfonso López Michelsen, y la fracción conservadora de Gómez, que es hoy indudablemente minoritaria dentro del conservadurismo.

Este resultado, que aseguró la «continuidad» política colombiana, había sido previsto y vaticinado por todos los observadores políticos. Se dió de este modo un evidente ejemplo de democracia, ya que democracia es —según un agudo comentarista colombiano— «la certidumbre de que ocurran normalmente las cosas que esperamos». Y es que, pese a lo manifestado por el ministro de Gobierno, Fernando Londoño Londoño, quien, interpelado por Alvaro Uribe, declaró no existir «una sola falla demostrable» en las elecciones, éstas dejaron bastante que desear en

punto a limpieza. «El país sabe a ciencia cierta —escribía *La Nueva Prensa* del 4-10 de abril de 1962— que esas elecciones pueden emular en materia de fraude con cualesquiera otras de nuestra turbulenta historia política. Ha visto votar a deshora en mesas sacadas a la calle por diligentes matronas, saludó enternecido el recuerdo de los muertos que se levantaron de la tumba para cumplir sus deberes cívicos y no ignora que hay una diferencia de medio millón entre las papeletas que se hallan en las urnas y las cifras comunicadas oficialmente.»

No parece posible, sin embargo, negar la victoria «grancoalicionista». Ahora bien: si su triunfo fué claro, precisa advertir que también fué solamente relativo, debido a los votos en blanco y, sobre todo, al elevadísimo número de abstenciones registradas. Estas y aquéllas ya habían sido anunciados durante la campaña electoral, en la que se demostró la existencia de una fuerte posición abstencionista, especialmente entre los nuevos grupos o partidos políticos que están situados fuera del sistema institucional. Las fracciones de los partidos tradicionales —y es de notar que dentro del MRL hay ya algunas disidencias— y los comunistas optaron por aconsejar el voto. Lo mismo hizo el nuevo Partido Social-Demócrata Cristiano (PSDC), aunque éste adoptó la fórmula del voto en blanco. Alvaro Rivera Concha, del Comité Ejecutivo Nacional del PSDC, explicó a este respecto lo siguiente: «El nuestro no es, desde luego, un partido confesional; sin embargo, convinimos en aceptar la orden de la jerarquía, favorable al voto. Es deber del cristiano, que no puede permanecer indiferente a los peligros que corran su patria y su religión. Sin embargo, la ley no reconoce en Colombia sino dos partidos, y nosotros no queremos ser liberales ni conservadores: ¿por qué entonces nos van a robar el voto? Optamos, pues, por la actitud más esforzada, la más difícil: el voto en blanco.»

Según los abstencionistas, concretamente, según Luis Emiro Valencia, del Movimiento Nacional Popular Gaitanista, todos los favorables al voto «se prestaron al juego *dentro del sistema.* Se llegó a formar por primera vez un Comité de Acción Ciudadana, financiado por empresas extranjeras y elementos de la Mano Negra, que derrochó dinero y propaganda a escala nacional, pidiendo a las gentes que votaran. ¿Por quién? Eso no tenía importancia. Lo esencial era *votar.* De esta manera se demostraría que Colombia era democrática, anticomunista y merecía las sobras de la Alianza para el Progreso» (en *La Nueva Prensa,* núm. 49, ya cit.). Además, el propio presidente Lleras se empleó a fondo para lograr que el pueblo votara y llegó a decir que la abstención constituía una especie de «traición a la patria»; y también la Iglesia aconsejó a sus fieles que acudieran a las urnas.

Pese a esta campaña general, puede decirse que las elecciones cons-

tituyeron un pequeño fracaso, pues se registraron más de cinco mil votos en blanco (cinco mil justos, según la «gran prensa» oficialista) y el cincuenta por ciento del censo se abstuvo de votar, lo que representa la sexta parte de la población colombiana total. Este porcentaje es muy digno de tenerse en cuenta a la hora de valorar el triunfo de la Gran Coalición, pues significa que más de la mitad del censo —es decir, los abstencionistas, los que votaron en blanco y los que votaron a alfonsistas y laureanistas— es contraria al actual sistema político.

Pese a todo, el resultado electoral del 18 de marzo demostró varios puntos importantes. En primer término, que la mayoría del país se muestra cansada y desilusionada del régimen de alternación, que no ha podido resolver, en sus cuatro años de vigencia, los dos problemas esenciales, cuya solución esperaba y espera el país, a saber: la violencia y la economía. Por otra parte quedó probado que actualmente la fracción ospinista de los conservadores es mayoritaria, lo mismo que lo es, dentro del liberalismo, la rama oficialista de Carlos Lleras Restrepo, cuya línea de dureza y temeridad domina hoy sobre la de prudencia de Alberto Lleras Camargo, primo del anterior y actual presidente de la República. Por último, las elecciones pusieron de relieve la existencia de lo que algunos llaman un «proceso prerrevolucionario», cada vez más poderoso y que trata de preparar la revolución nacional y social que el país necesita.

Pero el 18 de marzo fué muy significativo también en el orden a las próximas elecciones presidenciales, pues el triunfo «grancoalicionista» augura una victoria suficientemente clara al candidato oficialista Guillermo León Valencia, que podrá ascender a la primera magistratura del Estado después de su fallado intento de 1958, cuando el doctor Laureano Gómez rechazó su nombre. Valencia, hijo del célebre poeta, senador y ex embajador en Madrid, no tiene mucho crédito entre los políticos y los intelectuales, quienes le hacen blanco con cierta frecuencia de sus burlas; pero su extracción social, su caballerosidad y su sencillez hacen de él persona grata a la clase media. Algunos observadores han registrado, en este sentido, la formación de un «sentimiento valencista», y anotan la significación que puede tener el hecho de que la Gran Coalición haya elegido candidato a un hombre que no pertenece a la oligarquía tradicional colombiana. Hasta qué punto ese sentimiento sea real y lo encarne el candidato oficialista, lo dirán las urnas del 6 de mayo y, sobre todo, la futura actuación de Guillermo León Valencia si vence en las elecciones.

Frente a él y lo que representa, el Movimiento Revolucionario Liberal se apresta a dar la batalla, para lo cual ha elegido candidato a su jefe, el joven —nació en Bogotá en 1913—, dinámico e inteligente

profesor y político Alfonso López Michelsen, hijo del famoso jefe liberal Alfonso López Pumarejo, que fué dos veces presidente de la República. López Michelsen destacó desde niño por sus dotes oratorias, y después, por ser uno de los mejores alumnos del colegio Saint Michel, de los jesuítas de Bruselas, y de l'Ecole Pascal, de París. El asiduo contacto con su padre le hizo conocer en seguida el mundo político colombiano y el de la diplomacia, y de su progenitor recibió cuatro influencias claras: «Un dejo semidespectivo en la conversación, una preocupación constante y atenta por los problemas de Colombia, un planteamiento constante de puntos de vista distinto y a veces sorprendente, una gran capacidad para meditar con su propia cabeza» (*La Nueva Prensa,* núm. 50, 11-17 de abril de 1962, pág. 15). Graduado en el colegio mayor del Rosario, de Bogotá, se especializó en Derecho constitucional, materia de la que es profesor titular en la Universidad Nacional, y acerca de la cual ha escrito y publicado varias obras: *La estirpe calvinista de nuestras instituciones, Introducción al estudio de la Constitución de Colombia* y *Cuestiones colombianas.* Además, López Michelsen es autor de una novela, *Los elegidos,* en la que retrata y ataca a la oligarquía colombiana, extranjerizante, de moral relajada y entregada, durante la segunda guerra mundial, a los dictados de Estados Unidos. Buen conocedor de la historia de su país, Alfonso López Michelsen es un hispanista consciente, por cuya iniciativa se celebró, el 17 de junio de 1949, el cuarto centenario de la creación de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada. Siempre a la búsqueda de la auténtica nacionalidad colombiana, él ha afirmado que «el movimiento de la independencia nacional y el alejamiento de la tradición española colonial nos ha conducido a una contradicción entre las instituciones políticas de inspiración protestante y calvinista y la formación espiritual del pueblo, que es absolutamente católica» (*LNP,* número 50).

Proclamado candidato liberal a fines de 1961, en la Convención de Bucaramanga, el día 2 de abril de 1962, Alfonso López Michelsen entró en la Alcaldía Mayor de Bogotá para cumplir con el precepto constitucional de inscribir su candidatura. El alcalde, ingeniero Gaitán Cortés, se negó a inscribirla alegando que, «al elegirse un candidato en contradicción con lo prescrito por la Constitución, la elección, lo mismo que los actos que contribuyan a realizarla, son nulos; por tanto, la inscripción de un candidato cuya elección sea nula resulta a su vez igualmente nula». El alcalde confirmaba así lo que el propio presidente de la república manifestara antes al candidato liberal. Pero éste, especialista en Derecho constitucional, no desaprovechó la oportunidad que se le presentaba de dar una lección a la autoridad muni-

cipal. Sus palabras son dignas de transcripción: «El señor alcalde es el primer funcionario administrativo que, hasta donde van mis conocimientos, se irroga la facultad de decretar una nulidad por sí y ante sí. Las nulidades, como todas las calificaciones jurídicas, son privativas de la rama jurisdiccional. Un juez declara una nulidad delante de un hecho cumplido contrario al derecho; pero las nulidades se distinguen de las prohibiciones en que las primeras se cumplen después de ejecutado el acto cuya invalidez declara el juez. Las segundas no se pueden cumplir porque el funcionario administrativo está en capacidad de impedir previamente su ejecución. No está en manos del Gobierno asimilar prohibiciones y nulidades. Mucho menos cuando es la propia Constitución la que al escoger entre prohibir un acto o sancionarlo con la nulidad, opta por la última vía... Todo lo anterior demuestra una gran ignorancia de las personas que intervinieron a nombre del Gobierno en todo el proceso, porque si lo que se trataba de impedir era que la candidatura quedara inscrita, no lo consiguieron, por desconocer las leyes. Y en cambio produjeron un acto administrativo flagrantemente inconstitucional» (*LNP*, núm. 50, pág. 14).

Aceptada o no oficialmente, la candidatura de Alfonso López Michelsen a la presidencia de la república siguió adelante, después de recibir, el 31 de marzo, el espaldarazo de la convención «emerrelista», convocada para refrendar o retirar, a la luz de los resultados del 18 de marzo, el acuerdo adoptado en Bucaramanga. En dicha convención, reunida en el capitolio de Bogotá, el director del MRL pronunció un importante discurso, del cual hay que destacar tres puntos sustanciales. En primer lugar, la afirmación del derecho a colaborar en el Gobierno, en vista de los resultados electorales, que constituyeron un éxito para el movimiento. Formulada la correspondiente petición al presidente de la república, éste la rechazó por no creer «procedente» la solicitud alfonsista. En segundo lugar, el nuevo giro que va a tomar la línea política del MRL, que va a «dar un mayor acento a la cuestión social». Por último, el contenido político del movimiento, en cuanto a lo anterior y lo exterior. He aquí las palabras de López Michelsen a este respecto: «Me interesa sobremanera, y pienso a veces que mi propio nombre es un obstáculo para ello, romper definitivamente con los ismos de otras épocas. Nosotros no pretendemos ser los herederos del doctor Alfonso López ni del doctor Jorge Eliécer Gaitán, sino de los liberales de 1962. El mérito de tales caudillos reside en haber respondido a las exigencias de su tiempo, como nosotros aspiramos a responder a las necesidades del nuestro [...]. El MRL es hijo de sus propias obras.» «... He sido muy enfático en señalar como límite de mi acción al servicio del MRL las vías legales, la política de masas [...]; la

pelea no es peleando, sino pensando.» «Pienso que la misión de un partido político de izquierda no es únicamente subsistir ganando batallas electorales, sino transformar la sociedad.» «... Nuestra misión no es defender la revolución cubana, sino realizar nuestros propios programas [...]. No estoy dispuesto a alternar con oradores comunistas en la tribuna, en el curso de la campaña presidencial, si así lo decide la convención. No estoy tampoco en disposición de atar nuestra creación colombiana revolucionaria al futuro de la revolución cubana. Durante cuatro años sucesivos hemos proclamado la autonomía de nuestro movimiento frente a otros grupos de derecha y de izquierda; y mientras una convención no decida sustituir por un frente popular nuestra teoría de que lo importante es devolverle las libertades democráticas a todos los grupos, tampoco estoy dispuesto a aceptar imposición de ningún nombre por parte del comunismo en nuestras listas.» «Ni las restricciones monetarias del Fondo Monetario Internacional, de inspiración norteamericana, ni la dependencia de un mundo socialista a diez mil millas de distancia pueden asegurarnos el porvenir. Insisto en que no debemos ser peones de la guerra fría, sino reyes y reinas de nuestro propio destino en el tablero del ajedrez mundial.»

Con el espíritu reflejado por estos párrafos, que no precisan comentario, se dispuso López Michelsen a luchar por la presidencia de la república. Mientras tanto, todos los grupos políticos que antes del 18 de marzo abogaron por la abstención, se dispusieron a unirse para dar la batalla el 6 de mayo. Se constituyó, pues, el Frente Unido de Acción Revolucionaria, del que forman parte todos los grupos nuevos —Movimiento Nacional Popular Gaitanista, Movimiento Nacional Revolucionario, etc.—, excepto el PSDC, los comunistas, el MOEC y el grupo ARCO (ex comunistas) de Medellín. El FUAR es, en realidad, un grupo político nuevo que se llama a sí mismo movimiento nacional-revolucionario. Según demostró su primer acto público, celebrado el 9 de abril en el teatro California, la sombra de Gaitán ampara al grupo, pues allí se proyectó una película sobre el líder liberal asesinado hace catorce años y se escuchó la grabación de uno de sus discursos. El FUAR postula la toma del Poder por el pueblo sin interferencias plutocráticas u oligárquicas, «plenos derechos humanos y libertades reales para las grandes mayorías», la revolución agraria admitiendo la pequeña y la mediana propiedad rural, la reversión automática al Estado de las tierras mal explotadas, la planificación integral de la economía, el «control social» de ésta, la descentralización económica, administrativa e industrial, la nacionalización de los recursos naturales, el control estatal del comercio exterior, la desgravación del trabajo, el consumo y la pequeña empresa y el establecimiento

de impuestos progresivos sobre tierras y capitales ociosos, la limitación de concentración de la propiedad urbana, la educación gratuita, universal y obligatoria, y la plena soberanía, la amistad con todos los pueblos, la autodeterminación de las naciones y la lucha activa por la paz.

Este ambiente y estas preocupaciones preelectorales no pudieron evitar, sin embargo, la violencia, que se ha convertido en la obsesión de Colombia. El 27 de marzo, el Gobierno anunció su decisión de facilitar armas a los campesinos para que puedan defenderse de los ataques y asaltos a que les someten las bandas de guerrilleros y facinerosos como «Sangre Negra», «Desquite» y otros bandidos. Al día siguiente, *El Siglo* anunciaba en primera plana que en los ochenta y seis días de 1962 transcurridos hasta entonces la violencia había producido 480 muertos. Desde entonces, y exceptuando la pausa electoral, hay que añadir a ese número un promedio de 80 a 90 muertos semanales. La medida del Gobierno, propuesta por la Sociedad de Agricultores de Colombia, parece, pues, necesaria. Ahora bien: entraña un gravísimo peligro, pues resultará muy difícil controlar el destino de las armas, y los campesinos, además, pueden perderlas en los ataques de los bandoleros, más numerosos, fuertes y habituados a la guerrilla. Por otra parte, la decisión gubernamental no produjo buen efecto en la opinión, la cual no deja de comprender que el Gobierno implícitamente se confiesa impotente para vencer a los bandidos. El mal es, en cualquier caso, muy grave y constituye «una pesadilla que ya se prolonga demasiado», como dijo fray Luis Alberto Alfonso, O. P., en la conferencia que pronunció en la Universidad Libre sobre el tema *Odio y violencia en Colombia.*

La disertación del ilustre dominico, director de *Actualidad Cristiana*, ha sido considerada fundamental para el estudio y esclarecimiento de las causas y los caracteres de la violencia colombiana. Partiendo de la afirmación según la cual los hombres se combaten porque se odian o combaten aquellos que odian y odian lo que es un mal o creen que es un mal, el padre Luis Alberto dijo que «el auténtico liberal colombiano sabe que el conservador, aunque colombiano, es malo, y éste emite igual juicio acerca de aquél». Convencidos de que esto es una verdad que no necesita demostración, los colombianos crecen acostumbrados a oír execrar el nombre de sus adversarios políticos. La violencia es, por tanto, una situación creada por los mismos colombianos, «el fruto de nuestra actitud». De ésta no puede culparse al pueblo de Colombia, que es la víctima de dicha situación. Lo que hay que hacer es ser conscientes de lo que ha sucedido y de por qué ha sucedido. En otras palabras: «lo que hay que averiguar no es tanto

por qué se matan los campesinos unos a otros, sino por qué el gamonal del pueblo, el señor alcalde de turno, el dirigente político y demás «dirigentes», así como la prensa nacional, se ha unido para lanzar al campesino a la violencia. Por qué desde su niñez se le inculcó que su adversario político era necesariamente malo, y que el pariente, o el compadre, o el amigo, o el vecino no eran ya el pariente, ni el compadre, ni el amigo, ni el vecino, sino un enemigo que había que combatir y eliminar». Averiguar, sobre todo —y esto es lo importante—, «por qué se canalizó hacia la violencia contra el colega de miseria e ignorancia un resentimiento y un deseo de reivindicación, ése sí, legítimo, frente a la explotación de tipo feudal, a la injusticia social y económica». Sin embargo, frente a esta nueva explosión práctica de la vieja herejía maniquea, todos desean la paz. Si ésta no se produce es porque la paz que casi todos desean es «una paz basada en la opresión del débil», paz que «no puede sino engendrar la violencia». Hay que desear, pues, y buscar la paz cristiana, la paz evangélica, basada en el amor al prójimo, porque el verdadero cristiano no tiene enemigos ni extraños. ¿Y quién es el prójimo? Los «despojados de todo y medio muertos», los «seres humanos desprovistos hasta de lo más necesario», a los cuales atienden y se acercan para ayudarles ciertos samaritanos, que no pueden llamarse buenos, pero que «sí se detienen ante esos prójimos nuestros medio muertos, y que se detienen para ayudarlos a levantar». Se les podrá llamar «agitadores, demagogos, oportunistas» e incluso atribuírles malas o egoístas intenciones. «Pero es muy cierto —concluyó el padre Luis Alberto— que entre las ayudas y como parte de la curación que hay que llevar a esos prójimos heridos se halla el despertar en ellos la conciencia de su propia situación. Y aunque sólo fuera para quitar a los comunistas la iniciativa en este terreno, la conclusión para los cristianos en la actualidad viene a ser exactamente la misma de la parábola evangélica: «Vete y haz tú lo mismo.» Es decir, por lo menos en este punto, lo mismo que hace el ciudadano camarada» (en *LNP* núm. 50, págs. 33-44).

La vuelta de Janio Quadros

El miércoles 7 de marzo de 1962, Janio Quadros desembarcó en el puerto de Santos, después de más de siete meses de ausencia. Una gran multitud —unas diez mil personas— le esperaba, y allí mismo los periodistas quisieron que el ex presidente aclarase los motivos de su renuncia. Tras prometer que explicaría todo ocho días después, Quadros dijo: «De todos modos, he regresado para ocupar de nuevo, junto

al pueblo, un lugar que nadie en el mundo podrá quitarme nunca más.» Y agregó: «He regresado para luchar contra la explotación de los humildes, de los pobres, contra la conspiración de las fuerzas ocultas de este país.» Esta alusión a las «fuerzas ocultas», ya hecha en el texto de su renuncia, no fué suficientemente aclarada el día 15, cuando se dirigió al país por radio y televisión. «He renunciado —dijo entonces— para no traicionarles. Si hubiera cedido a las presiones que se ejercían sobre mí, hoy no podría hablarles con el corazón, como lo estoy haciendo. Mi conciencia está tranquila. El presidente que ustedes eligieron sigue siendo el candidato por quien votaron.» Añadió, sin embargo, que el embajador de Estados Unidos y el enviado especial del Departamento de Estado, Adolf Berle, se habían interferido en su acción para convertir en realidad el principio de autodeterminación de los pueblos, y le habían dicho —lo que le costó el cargo al embajador— que países como Brasil no podían permitirse el lujo de tener soberanía diplomática. Quadros, que creyó siempre que la Revolución cubana representa una etapa fundamental en la emancipación social y económica de Hispanoamérica, trató de dominar y suprimir esas interferencias extrañas, pero vió, con doloroso asombro, que algunos de sus compatriotas —los dependientes del capital extranjero— se ponían frente a él. «Estaba convencido de que, defendiendo con intransigencia el principio de no intervención y la autodeterminación de Cuba, prestaba un servicio a la democracia. El gobernador de Guanabara me denunció, sin embargo, ante el presidente de un país extranjero. Dijo que yo intentaba establecer en el Brasil una cabeza de puente para la penetración del comunismo en el continente». El Parlamento dió crédito a Lacerda, y, al mismo tiempo, la «gran prensa» y parte del capitalismo brasileño apoyaron las interferencias estadounidenses.

En esta situación, Janio Quadros hubiera tenido que acudir a pactar con la oligarquía o dar un golpe de Estado. La primera de estas dos vías iba contra las más íntimas convicciones del presidente. ¿Intentó la segunda? El interesado no dijo nada a este respecto, pero quizá haya algún indicio para pensar que trató de echar por ese camino (véase mi libro *Suramérica, alta tensión),* aunque sin la energía ni la convicción necesarias para triunfar, debido a su convencimiento democrático. En cualquier caso, la «euforia reinó entre los poderosos de este país cuando se conoció mi renuncia. Desde entonces han tenido ocasión de meditar sobre sus conveniencias. Por mi parte no he perdido la fe. Vuelvo a empezar».

Así, pues, Quadros ha regresado al Brasil para empezar de nuevo su batalla contra la corrupción y los abusos de toda clase. Su oportu-

nidad parece que vuelve a ser excelente. Incluso el propio Carlos Lacerda ha dicho que «entre Janio y el caos, me quedo con Janio». ¿En qué consiste esa amenaza de caos? En primer término, la situación política se caracteriza por el equilibrio inestable que es el nuevo sistema parlamentario, dominado por oligarcas terratenientes e industriales, pero que no parece muy seguro, pues cuenta con la animadversión de los tres jefes brasileños más poderosos: Kubistchek, Quadros y Goulart. Consecuencia de esta situación política es la mala coyuntura económica que el país atraviesa y que se refleja en el abultado ascenso del costo de la vida, que aumenta a razón de un 60 por 100 anual. El problema del Nordeste, cuyo plan de irrigación fué echado abajo por la mayoría parlamentaria, y el de la reforma agraria constituyen otras dos dificultades graves para el gobierno, que tienen, además, peligrosa repercusión social. Por lo que se refiere al campo, Goulart tuvo que ceder ante el Parlamento y aceptar el pago de indemnizaciones por la tierra expropiada. Ahora bien: como no hay dinero —Tancredo Neves ha hecho público el gran déficit existente en el presupuesto y en la balanza de pagos—, la reforma agraria no podrá llevarse a cabo.

En este estado de cosas, Quadros fué recibido como el salvador. Lo sea o no, él ha empezado ya a moverse, y muchos observadores vaticinan ya su triunfo en las elecciones de octubre. De ser así, Goulart no tendría más remedio que nombrarle jefe del Gobierno, con lo cual reuniría en sus manos todo el poder de que careció en la presidencia para llevar adelante su política. Por de pronto, mientras Goulart se preparaba para salir hacia Washington y mientras hacía su viaje, Quadros ha iniciado una aproximación y ha tomado contacto con Leonel Brizola, gobernador de Río Grande do Sul y cuñado del actual presidente. Este debe, en realidad, su cargo a Brizola, pues fué él quien movió al general Machado Lopes, jefe del III Ejército, a apoyar a Goulart cuando la crisis del pasado agosto, con lo que frustró el golpe preparado por Lacerda. Hombre joven —cuarenta años—, enérgico y convencido de la necesidad de hacer una revolución nacional en Brasil, Brizola sorprendió a la opinión —muy a principio de marzo— con la expropiación de la Companhia Telefonica Nacional, subsidiaria de la International Telephone and Telegraph estadounidense.

Ya desde 1960 se sabía que Brizola deseaba cambiar el *status* de la Compañía, y había propuesto en distintas ocasiones la formación de una nueva empresa con participación del Estado y de la Compañía. Después habló de organizar una empresa «piloto» con capitales de diversas procedencias, pero controlada por el Estado. Por último, y pese a haber manifestado no tener interés en realizar la expropiación, decretó ésta y ofreció pagar 400.000 dólares por lo que vale, según

algunos, ocho millones. Esta medida ha sido pésimamente acogida por las oligarquías demoliberales *made in USA* (véase *Visión*, vol. 22, número 10, p. 23), que la atribuyeron a demagogia y al deseo de preparar su plataforma política para las elecciones de octubre. Los conservadores también acogieron mal la expropiación, con la que—afirmaron—Brizola trataba de ocultar los errores de su administración. En cambio, la opinión nacionalista y popular apoya con entusiasmo al gobernador de Río Grande do Sul, que cuenta, además, con la admiración de los sectores nacionalistas de las fuerzas armadas brasileñas. Pese a todo, la medida tomada por Brizola no habrá favorecido mucho la gestión de su cuñado en Washington, adonde se dirigió en abril para solicitar créditos por valor de más de 500 millones de dólares con cargo a los fondos de la Alianza para el Progreso.

Brizola cuenta, en todo caso, con el apoyo y la confianza populares, y puede prestar a Quadros una colaboración inestimable. Se dice, en este sentido, que el gobernador invitó al ex presidente a presentar su candidatura a la Cámara de Diputados o al Senado de Río Grande do Sul, y que incluso ha anunciado su propósito de aliarse políticamente con Janio Quadros. ¿Volverá el ex presidente a regir los destinos de su país?

Cambio de rumbo en Ecuador

Faltan aún varios días para que se cumplan los seis meses de mandato de Carlos Julio Arosemena en Ecuador, y ya se han producido algunos acontecimientos que permiten detectar un cambio importante en el camino político emprendido por el país—al menos, por el «país político»—el 8 de noviembre de 1961. Formó entonces Arosemena un gobierno de coalición, en el que no entraron ni los comunistas ni, pese a la ayuda que le prestaron, los arnistas de Jorge Luna, como tampoco los de Nicolás Valdano, a quien Arosemena debió nombrar vicepresidente. Pero pese a la formación del nuevo gabinete, la subida de Arosemena se interpretó como un claro viraje a la izquierda, e incluso se podía prever razonablemente que la coalición gubernamental era sólo una cortina de humo para disfrazar un extremismo izquierdista o tranquilizar a la opinión y prepararla para un cambio más radical.

Quizá por esa razón, la ruptura de relaciones con Cuba, anunciada por Arosemena el día 2 de abril, produjo tanta sorpresa a derecha e izquierda, sorpresa aumentada, indudablemente, al saber que la medida había sido aconsejada o impuesta por los militares. ¿Qué había pasado? Todo arranca, indudablemente, de la Conferencia de Punta del

Este, en la cual Francisco Acosta Yepes, ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, militante del Movimiento Social-Cristiano, cumplió las instrucciones de su gobierno y no el acuerdo de su partido y votó en contra de la propuesta condenatoria de Cuba. Esto determinó, aparte de la protesta del social-cristianismo, una aproximación del centro a la derecha, hasta el punto de permitir que algunos observadores hablaran de un galo-poncismo, es decir, de un entendimiento entre el jefe liberal Galo Plaza, embajador en Washington, y Camilo Ponce, jefe de los social-cristianos. Al mismo tiempo, Carlos Guevara Moreno, jefe de la Concentración de Fuerzas Populares, partido de centro-izquierda, cambió su tendencia izquierdizante y se aproximó a la derecha o, por lo menos, adoptó un activo y violento anticomunismo. Por último, el velasquismo se inclinó, en general, hacia su ala derecha, de la que es cabeza visible el coronel Patricio Lasso Carrión.

La agitación empezó con una serie de manifestaciones anticastristas realizadas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, en las que se pedía la ruptura con Cuba. A esta acción derechista respondió la extrema izquierda del Movimiento Popular Revolucionario —que forman el Partido Socialista Revolucionario, el partido Comunista, la Unión Revolucionaria Juvenil Ecuatoriana (URJE), el Movimiento de Restauración Democrática (arosemenistas) y los grupos liberales de Antonio Parra Velasco, enemigos de Plaza— con alteraciones del orden público, amenazas de huelgas y algunos actos terroristas, sobre todo en Cuenca, donde públicamente se injuriaba a la iglesia y se pedía la disolución del Ejército, que debería ser sustituído por milicias.

Con base en esta agitación, a fines de marzo se reunieron en Cuenca el comandante general del Ejército, coronel Carlos Arregui Viteri, y treinta y cinco oficiales de El Oro, Loja, Quito y Cuenca, entre los que se hallaban el jefe militar de esta última ciudad, el jefe del Estado Mayor general de las Fuerzas Armadas y el jefe del Batallón «Chimborazo». De esta reunión salió el compromiso de lograr la ruptura de relaciones con los países comunistas y la salida del gobierno de todos los elementos de extrema izquierda. Con esta denominación se aludía específicamente a Juan Isaac Lovato, ministro de Previsión Social y Trabajo, y a Gonzalo Almeyda Urrutia, secretario general de la Administración. El 28 de marzo, la guarnición militar de Cuenca se subleva y exige a Arosemena la ruptura con Cuba. El Ejército se mantuvo fiel al orden constitucional, pero se produjeron desórdenes en varias ciudades y el Gobierno dimitió en pleno. Por fin, después que el Tribunal Supremo Electoral se declarara sin facultades para organizar el plebiscito nacional que el presidente propuso para decidir o no el rompimiento con Cuba, éste fué anunciado el 2 de abril. Era la condi-

ción puesta por el Frente Democrático Nacional para colaborar en el Gobierno. En efecto, la salida de los ministros de Gobierno, liberal, Industria, conservador y Previsión Social, socialista de izquierda, fué cubierta con la entrada de un miembro de la Unión Democrática de Independientes, un socialista democrático y un liberal placista.

El grupo de Galo Plaza ha sido, en realidad, el más beneficiado por la crisis, y en ello no es posible dejar de ver la influencia estadounidense, pues no hay que olvidar que Galo Plaza es hoy embajador ecuatoriano en Washington. Quizá por eso, Arosemena se apresuró a declarar que su Gobierno —del que se retiraron los conservadores para unirse a la oposición derechista de los social-cristianos y los arnistas— sería, de ahora en adelante, de centro-izquierda, que es el matiz o color político grato hoy a Estados Unidos. Pese a todo, es preciso recordar que en la crisis de noviembre de 1961 se puso de manifiesto una división interna de las fuerzas armadas. En el último cambio —último hasta fines de abril— ecuatoriano sólo ha intervenido, al parecer, el Ejército de tierra. ¿Está el resto del brazo armado de acuerdo o habrá que esperar nuevos acontecimientos?

☆

No es posible cerrar este informe sin aludir siquiera a otras situaciones tensas y graves por que atraviesa Hispanoamérica. Así, en Venezuela, Betancourt ha perdido la mayoría en el Congreso, debido a dos escisiones de Acción Democrática (MIR y ARS) y al aumento de la oposición izquierdista, de Unión Republicana Democrática y del comunismo, que son los responsables de huelgas, desórdenes estudiantiles y de la aparición de guerrillas. Estas dan también señales de vida activa en Guatemala, donde el presidente Ydígoras ha visto aumentada la oposición con la retirada del Gobierno del Partido de Unión Democrática, con lo cual sólo le apoyan el partido Redención y el Movimiento Democrático Nacionalista. A su vez, la campaña electoral peruana empezó a adquirir en el mes de abril caracteres violentos; y en México, por último, se han producido disturbios en San Luis Potosí, donde el Partido de Acción Nacional y los demócratas potosinos (grupo local) reivindican sus derechos frente al cada vez más acusado giro izquierdista del partido oficial. Pero de México y Perú es necesario hablar más despacio.—JAIME DELGADO.